

EL PROYECTO EUROMEDITERRÁNEO, ESPEJO DE LAS CONTRADICCIONES EUROPEAS

Gema Martín Muñoz

Profesora de Sociología del Mundo Árabe e Islámico
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Hace diez años nació a través de la Declaración de Barcelona el ambicioso proyecto Euromediterráneo que agrupaba a los países de la Unión Europea y a todos los ribereños del sur y este mediterráneos (a excepción de Libia¹). Hasta entonces, la cooperación entre Europa y el Mediterráneo se había desarrollado sobre todo en el marco del Mediterráneo occidental (grupo 5+5) y en torno a la idea nunca puesta en práctica de celebrar una Conferencia de Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo inspirada en la europea de Helsinki. El Foro Mediterráneo constituyó también un particular marco sobre la «idea mediterránea»².

Las razones por las que se logró que los veintisiete Estados concernidos firmasen la Declaración de Barcelona, estaban relacionadas con el marco internacional y regional en el que se inscribió el proceso euromediterráneo. En general, el nuevo marco internacional consecuencia del derribo de la URSS y del fin de la bipolaridad entrañó la necesidad de re-

¹ La lenta incorporación de Libia sólo ha llegado por el momento al nivel de observador, título con el que ha participado a partir de la cumbre de Marsella del 16 de noviembre de 2000.

² El Foro Mediterráneo nació como una estructura informal y flexible de concertación entre países mediterráneos «escogidos» (Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Turquía, Malta, España, Francia, Italia, Portugal y Grecia) para abordar las principales cuestiones que afectaban a la seguridad y la cooperación en la región. Fue fruto de una propuesta presentada por Egipto a España y Francia a principios de noviembre de 1992 (se constituyó finalmente en Alejandría en 1994) y, además de formar parte de esa dinámica de cooperación euromediterránea, su creación, como propuesta egipcia que fue, estuvo también ligada a los cambios de política exterior experimentados por Egipto tras el fin del orden bipolar. Ver a ese respecto Gema Martín Muñoz, «Egipto, sistema político y marco regional» en G. Aubarell (ed) *Las políticas mediterráneas*, Barcelona, Ikaria, 2000, pp. 261-296.

estructurar alianzas y establecer nuevos marcos interestatales regionales. Esas transformaciones experimentadas por el sistema global afectaron a la interpretación del principio de seguridad y engendraron dinámicas nuevas (tendencia a la fragmentación del orden interestatal y refuerzo de la interdependencia económica). Concretamente, por parte de los miembros europeos, desde hacía tiempo, pero de manera creciente desde la Guerra del Golfo, se acentuaba la idea de que la estabilidad y seguridad de la región del sur Mediterráneo les afectaba directamente y que éstas en buena medida dependían de las relaciones políticas y de la intensidad de los vínculos económicos entre ambas orillas. Había un claro origen político-estratégico en el interés europeo, y principalmente sur-europeo, de reforzar la cooperación con los vecinos mediterráneos. Así, la política mediterránea de la UE será sobre todo fruto de iniciativas lanzadas por España, Italia y Francia, en tanto que la Europa central se «especializará» en las cuestiones relativas a los países de la Europa oriental. Para la Europa del Sur, la estabilidad se juega sobre todo en su vertiente meridional donde los problemas socio-económicos y políticos que afectan a todos sus países constituyen un potencial riesgo desestabilizador.

Por su parte, los países del Mediterráneo sur esperaban sacar importantes ventajas económicas y financieras, además de una garantía externa para sus deslegitimados y vulnerables gobiernos³.

Desde el punto de vista de la letra, la Declaración de Barcelona que fundamentó el proceso euromediterráneo en 1995 daba un importante salto cualitativo al abordar las relaciones entre Europa y los países del Sur del Mediterráneo de manera global y no sólo desde la perspectiva económica que hasta entonces había prevalecido. Parecía ser una toma de conciencia de que la mejor manera de estabilizar la región era, además de apoyando la reforma liberal económica, avanzando en el proceso político democrático, dinamizando el desarrollo de las sociedades civiles y abriendo espacios de encuentro cultural. Los europeos aspiraban a recuperar presencia y liderazgo en una región donde habían quedado progresivamente ausentes desde la Segunda Guerra Mundial a favor del juego bipolar de las superpotencias. Coincidió también con un momento de cierto entusiasmo al calor del entonces llamado «proceso de paz» palestino-israelí, así como cabía esperar que el estrechamiento de relaciones con Europa podría abrir dinámicas de apertura política.

³ Ver Gema Martín Muñoz, *El Estado Árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista*, 2002. Barcelona, Edicions Bellaterra.

Diez años después los acontecimientos que han convulsionado la zona han ido imponiendo un escenario desalentador que poco invita al optimismo y en el cual los europeos parecen estar más ausentes que nunca.

El «proceso de paz» fue fiel a la crónica del fracaso anunciado por muchos desde sus primeros pasos, entre ellos el prestigioso intelectual palestino Edward W. Said. No sólo se puso fin al llamado proceso de paz sino que la degradación de la situación ha llevado a los territorios palestinos, completamente reocupados por Ariel Sharon, a una situación de colonización judía masiva y a la imposición del unilateralismo israelí. Israel ya sólo trata de la cuestión con Washington. Los palestinos han quedado excluidos en la decisión sobre su propio destino. Y los europeos parecen estar igualmente ausentes.

La aparición del terrorismo de factura al-Qaeda, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, ha transformado radicalmente el marco internacional y ha ofrecido a los neoconservadores estadounidenses el pretexto que necesitaban para transformar la región de Oriente Medio. Lo que ha significado la ocupación militar de Afganistán y de Irak, así como el apoyo incondicional a la derecha israelí y a todos los regímenes árabes solicitados para luchar contra el terrorismo. Los resultados no se han hecho esperar: un proceso agudo de desestabilización de Oriente Medio, un uso y abuso de la lucha contra el terrorismo que ha aumentado de manera alarmante la violación de los derechos humanos y la Convención de Ginebra y un refuerzo del autoritarismo de los regímenes árabes aliados de Washington. En toda esta profunda transformación de la región, los europeos, divididos, no pudieron influir en la política estadounidense contra Irak, en tanto que observan cómo EEUU monopoliza la influencia política y los intereses económicos en todo Oriente Medio. Incluso en el Magreb, región tradicionalmente de mayor influencia europea que estadounidense, Washington se ha afirmado desde el 11 de septiembre. Las relaciones EEUU-Argelia, centradas en la lucha anti-terrorista y el acceso a los hidrocarburos ante el proceso de privatización de la sociedad nacional argelina Sonatrach, se han ido reforzando en los últimos años. Y Marruecos firmaba en el 2004 un acuerdo con EEUU de libre comercio que, aunque plantea incompatibilidades jurídicas con el firmado anteriormente con la UE, los europeos no han sido capaces de contestar.

¿Qué resultados desde 1995?

Desde 1995 hasta la actualidad, los esperados procesos de reforma democrática han sido sustituidos en la mayoría de los casos por una deriva

autoritaria que ahoga a las poblaciones. En este sentido habría que indicar que la preocupación primera de la Asociación euromediterránea de estabilizar los Estados del sur (como estipula la Declaración de Barcelona: «crear una zona de paz y estabilidad que repose en los principios fundamentales del respeto de los derechos humanos y la democracia»), ha sido comprendida como un apoyo a los regímenes, acompañada, en consecuencia, de una escasa preocupación por las transformaciones reales de los modos políticos de gobierno. Se ha aplicado el criterio del pragmatismo político en función de concentrarse principalmente en el impulso de la liberalización económica de acuerdo con la teoría de que ésta generará profundos cambios sociales que inevitablemente desembocarán en la liberalización política. Sin embargo, este marco teórico no ha dado los resultados esperados. En estos últimos cinco años la situación de los derechos humanos se ha deteriorado notablemente en algunos países de la ribera sur del Mediterráneo e incluso podríamos señalar que el partenariado ha contribuido a reforzar simbólicamente y políticamente la credibilidad de regímenes en gran «impasse» democratizador.

En este sentido, hay que señalar que la UE no ha hecho ningún esfuerzo por que se respete el artículo 2 de los Acuerdos de libre comercio, en el que se condicionan al respeto de los derechos humanos y las libertades civiles. Y aunque algunas organizaciones de derechos humanos han recibido apoyos financieros de la UE (sobre todo la Red Euromediterránea de Derechos Humanos), las señales han sido demasiado tímidas para que actuasen como verdadera presión sobre los poderes establecidos.

La economía no ha cumplido con su papel transformador y, por tanto, la liberalización económica que tenía que conducir a la autonomización de los actores económicos de los políticos, a la competencia, la transparencia y la supresión de comportamientos rentistas y monopolistas, encuentra grandes trabas y bloqueos. Las privatizaciones han sido muy poco ambiciosas y no ha habido emergencia de esos esperados nuevos actores. Es más, no ha habido difusión de los beneficios entre la población. El número de personas que vive con un dólar o dos al día y los que están por debajo del umbral de la pobreza ha crecido de manera preocupante desde los años noventa en el Mediterráneo sur y el ingreso medio de cada franja social ha descendido notablemente. Dado que se observa que ese aumento de la pobreza se ha acompañado de un aumento del PIB por habitante, es indudable que se han acrecentado las desigualdades en el reparto de la riqueza y que una parte de la población se hace mucho más rica en tanto que la otra, la mayor, mucho más pobre.

En el ámbito comercial, los niveles de intercambio no han aumentado ni se han diversificado y el comercio Norte-Sur sigue estando muy dese-

equilibrado. En general, la situación política inestable en toda la zona deja a la concepción de los acuerdos de libre cambio bastante fuera de alcance práctico.

Con respecto a la deseada cooperación sur-sur, ningún progreso se ha experimentado, incluso, los intercambios han descendido. Tanto la concepción histórica de las relaciones económicas norte-sur, que han estructurado las economías y corrientes comerciales del sur en función de las necesidades europeas y no de su complementaridad, como las enormes distancias políticas que existen entre sus regímenes y las resistencias de éstos a permitir fronteras flexibles con libre movimiento para sus nacionales, son las causas que siguen bloqueando la cooperación sur-sur y que en buena parte están relacionadas con los problemas internos de dichos Estados, necesitados de ejercer un estricto control sobre su insatisfecha ciudadanía.

Las semi-reformas emprendidas son muy modestas y las privatizaciones muy insuficientes. Sigue existiendo un enorme sector público ante un débil sector privado que, en absoluto, es capaz de traspasar el umbral necesario que le permita desencadenar una dinámica de acumulación privada manteniendo un crecimiento fuerte⁴.

Asimismo, el débil nivel de flujos de inversiones extranjeras directas en la región mediterránea es muy preocupante dado que la concepción de la asociación euromed hace descansar explícitamente en el sector privado la responsabilidad de ser el motor o el «instrumento privilegiado» de la convergencia deseada entre las dos orillas «en el marco de una zona de libre cambio» (y sólo el 5% de los flujos europeos dirigidos a los países emergentes se orienta al conjunto de los mediterráneos). ¿Por qué esta región es menos atractiva que otras del mundo que no están mejor provistas que ésta en recursos humanos y naturales? Todo parece indicar que se debe a un problema de mal funcionamiento y confianza (falta de cohesión social, sistemas políticos inestables, falta de transparencia y seguridad jurídica, rigidez del mercado laboral, analfabetismo)⁵.

Realmente nos parece que la cuestión está en que el escaso éxito de la transición económica no es ajeno a la contradicción en que se basa la concepción europea de poner la democratización al servicio de la liberalización económica, porque la consecuencia de ello es que el partenariado

⁴ Gérard Kébabdjian, «Réformes économiques sans projet réformateur». *Confluences Méditerranée*, 35, 2000, pp. 25-40.

⁵ Juan Badosa, «La cooperación económica desde la perspectiva de los países del Norte del Mediterráneo». *II Foro Euromediterráneo de Formentor*. Edición de la Fundación Repsol, Madrid, 2001.

favorece políticamente a los grupos tradicionales e históricos, esas elites que se perpetúan en el poder y gozan de privilegios económicos a través de su control «depredador» de la renta del país. Estos grupos son quienes más se pueden ver debilitados por la transparencia, la economía de mercado, la institucionalización de los intercambios y la emergencia de nuevas élites autónomas, y, por tanto, no pueden (porque es intrínsecamente contrario a sus intereses) ser el motor del cambio económico estructural necesario para que la teoría europea funcione. Es decir que la Unión Europea persigue la difícil cuadratura del círculo de pretender potenciar «reformas sin reformistas».

A ello habría que añadir que la dimensión social de la asociación euro-mediterránea apenas ha sido desarrollada (los ministros de Empleo, Asuntos Sociales y Trabajo casi nunca se han reunido). Los temas sociales han recibido algo más de atención a través de la cooperación bilateral MEDA, pero funcionando más bien como socorro para los más perjudicados por el ajuste estructural, y aún así con muchas dificultades para racionalizar y garantizar el acceso de los ciudadanos a dichas ayudas por la ineficaz gestión local y las distorsiones clientelistas. Pero en absoluto se ha tratado de actuar sobre las causas políticas y económicas que engendran los desequilibrios sociales, porque podrían cuestionar el espíritu neoliberal del modelo económico.

Asimismo, no hay que olvidar que desde marzo del 2003 la UE ha relegado el proceso Euromediterráneo a favor de su Nueva Política de Vecindad, pensada a raíz de su ampliación a 25 países⁶. Esta nueva política, si bien integra al flanco mediterráneo, se basa en una visión general que engloba todos los espacios que componen la vecindad con la UE. Y, hay que decir, está pensada más en referencia al Este que al Sur⁷.

Una sociedad civil «selectiva»

La declaración de Barcelona establecía el principio de «contribuir a una mejor comprensión mutua entre los pueblos de la región alentando la emergencia de una sociedad civil activa». En estos diez años han sido diversas las iniciativas que han llevado a la creación de redes (como el de Derechos Humanos, sindicales, culturales, jóvenes...) y se han celebrado

⁶ Comisión Europea, *L'Europe élargie et voisinage: un nouveau carte pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud*. Marzo, 2003.

⁷ Sophie Bessis, «Où en est le projet euro-méditerranéen dix ans après Barcelone?». *Revue Internationale et Stratégique*, n.º 59, Otoño 2005.

ocho foros civiles, así como numerosas conferencias regionales y programas de cooperación. Pero ese interés por el desarrollo de la sociedad civil se ha sometido a un proceso de selección en el que los interlocutores han sido con frecuencia organizaciones vinculadas a los gobiernos y, en cualquier caso, siempre procedentes de los sectores laicos o secularizados que, si bien son un componente de esas sociedades, son minoritarios y poco representativos en la extensa red del movimiento asociativo. Frente a esto, ha quedado al margen del proceso todo el diverso movimiento asociativo de carácter islámico e islamista que, sin embargo, está muy presente en el tejido social de los países árabes.

En realidad, existe todo un universo vinculado al movimiento islámico (*al-Haraka al-Islamiyya*) que es un componente, tanto político como social, de gran relevancia en la esfera pública árabe actual y que ha quedado completamente fuera del partenariado Euromediterráneo.

En términos políticos, todo ello nos lleva a plantear dos importantes cuestiones. Una, la necesidad de construir un proceso político creíble que satisfaga las grandes aspiraciones de democracia y estado de derecho que existe en las poblaciones del Mediterráneo sur. Teniendo en cuenta que sus frustraciones en este sentido abren enormes riesgos de radicalización e identificación con opciones extremistas, sobre todo entre la gran población joven. Dos, la participación de los partidos islamistas en esos procesos de democratización. En este sentido hay que clarificar que la tendencia islamista, que constituye un pensamiento político presente en toda la historia contemporánea de Oriente Medio, está principalmente representada por partidos reformistas respetuosos de la legalidad y explícitamente contrarios a la violencia.

El problema durante mucho tiempo ha radicado en que la visión dominante que se ha extendido sobre el islamismo se ha basado en la selección y sobredimensión mediática de, o bien los defensores del discurso más integrista, o bien de los sectores más radicales y extremistas. Aplicando mayoritariamente estos criterios de selección de los actores islámicos se ha ocultado o silenciado que los partidos islamistas mayoritarios están situados en tendencias reformistas que se ubican en el enorme espacio central que queda normalmente oculto entre los integristas y los violentos.

Sin embargo, el itinerario y evolución de los partidos políticos islamistas reformistas ha sido muy diferente al de las ramas integristas y extremistas. Este islamismo reformista, representa la emergencia de una nueva generación política que es también parte del proceso de modernización experimentado; y por ello, está vinculado a los cambios sociales y políticos que experimentan las sociedades musulmanas actuales. De hecho, la observación de los comportamientos provocados por la afirmación

islámica en el terreno político muestra tres rasgos interdependientes que son considerados en las ciencias sociales como modernos: la autonomización del individuo, la individualización de los actores sociales y la ampliación de las mujeres al espacio público. En consecuencia, se alejan de las visiones ahistoricistas, en las que el islam es percibido como un sistema intemporal que potencia el inmovilismo. Por el contrario, son una tendencia muy preocupada por los elementos socio-educativos y por la búsqueda de referencias propias para recuperar una imagen de sí mismos positiva y afirmativa. De Occidente se espera un tratamiento de reconocimiento y respeto, pero no se construye la recuperación del islam contra Occidente. Lo que sí se cuestiona es que la especificidad del universo cultural occidental haya sido erigida arbitrariamente en referencia universal absoluta. Por ello, cuando en ocasiones este discurso islamista expresa críticas hacia Occidente no es porque desprecie los valores que en él existen de progreso y desarrollo o en relación a las libertades públicas que en él se gozan, sino por su a veces arrogancia y su doble moral a la hora de defender los derechos humanos o la democracia.

En términos de acción política, en la actualidad podemos decir que estamos ante la tercera generación islamista, y esta generación pone de manifiesto tanto su anclaje en el marco territorial del Estado-nación (frente a las visiones panislámicas) como un proceso de maduración política, que los ha impulsado a favor de la cultura del consenso con otros proyectos sociopolíticos distintos del islámico en el marco del pluralismo político, de las elecciones, del gobierno. La aceptación del pluripartidismo y del reparto del poder, así como el reforzamiento de sus posiciones participativas en las instituciones del Estado, manifestada por partidos como al-Nahda de Túnez, el FIS de Argelia o los Hermanos Musulmanes de Egipto, y corroborada por la participación parlamentaria de los Hermanos Musulmanes en Jordania, de Hezbollah en Líbano y más recientemente del Partido por la Democracia y la Justicia (PDJ) en Marruecos, así como claramente constatada en el caso de Turquía, muestran su adecuación al pluralismo y a los principios democráticos, en tanto que las políticas gubernamentales partidarias de su exclusión van ligadas a las experiencias más dictatoriales.

Estos partidos islamistas reformistas deben ser entendidos como actores políticos llamados a participar junto con los otros partidos en la reforma democrática de los sistemas políticos árabes, entre otras razones porque cuentan con una importante credibilidad y peso social, de manera que sin su participación el proceso no sería creíble. Su adaptación al gobierno representativo ya se ha constatado y su referencia a la fe, si dejamos de entender de manera «excepcional» lo que procede del islam, nos daríamos

cuenta de que no son muy lejanos a la órbita de los partidos democristianos existentes en todo el mundo occidental. El influyente pensador islamista Yusuf Qardawi se preguntaba, no sin razón, por qué los europeos aceptan partidos de denominación y espíritu cristiano y niegan ese derecho a los musulmanes.

No sólo no se puede hacer la amalgama entre los islamistas extremistas y los reformistas (todos los partidos reformistas han denunciado la violencia y condenado los atentados terroristas), sino —lo que es muy importante— la marginación o represión de estos últimos favorece a los primeros. En momentos de tanta tensión y riesgos como el actual, pueden desempeñar un papel intermediario moderador de unas sociedades excitadas y llenas de hartazgo por el autoritarismo y la marginación socio-económica a las que están sometidas.

Es más, el papel del islamismo reformista es ahora más determinante porque su influencia política y social es un factor sustancial para deslegitimar y aislar a los grupos extremistas. De hecho, el islamismo reformista es el peor enemigo sobre el terreno social para los defensores del extremismo y la violencia. Lo cual les da hoy día un valor de estabilizadores sociales aún mayor. Por el contrario, cualquier política basada en el hostigamiento, el cierre de las políticas integradoras o la represión de los islamistas reformistas no beneficiará más que a los reclutadores extremistas de jóvenes frustrados, desencantados y radicalizados al ver que la vía democrática no logra carta de naturaleza y capacidad de alternativa en el sistema político de sus países.

En términos sociales, todo ese universo islamista o del movimiento islámico ha desarrollado una importante red asociativa que, junto a las organizaciones laicas o secularizadas, forma también parte de la sociedad civil. Esa sociedad civil vinculada al movimiento islámico no debe ser reducida a la mera reivindicación religiosa sino que se trata de actores sociales imbricados en la historia y las realidades socio-económicas y políticas de sus países y de la región (y por tanto a un proceso de secularización, si bien aún poco visible). Esos actores reclaman su derecho a participar pacíficamente en la vida social y política y, por tanto, frenar o impedir su integración plantea un importante déficit de comportamiento democrático.

El rechazo a reconocer la existencia de esa compleja pluralidad que caracteriza a las sociedades árabes actuales no sólo ha venido por parte de los Estados autoritarios, que rechazan la alternancia democrática en sus países, sino también de la mayor parte de la sociedad civil árabe laica o secularizada y de los Estados europeos del partenariado Euromediterráneo. Numerosos sectores de la sociedad civil secularizada, árabe y europea, se han opuesto radicalmente a abrir cualquier diálogo con los mo-

vimientos de la tendencia islámica —calificándola de «retrógrada» y «oscurantista»— y, en consecuencia, secuestrando para su solo beneficio el concepto de «sociedad civil». Pero la realidad muestra que esos actores del movimiento islámico ni son ajenos al proceso de secularización ni se han quedado al margen de la reivindicación democrática. Constituyen un importante componente del paisaje político-social que no puede ser dejado de lado ni excluido, no sólo porque es contrario a los derechos universales que reivindican los sectores secularizados sino porque, además, la historia muestra que los costes de su marginación son muy elevados⁸.

Es cierto que al calor de la reflexión sobre la necesaria promoción de la democracia en los países del Norte de África y Oriente Medio, que ha ido adquiriendo relevancia creciente en la diplomacia internacional, los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en una reunión informal en Luxemburgo celebrada el 16 de abril de 2004, se les presentó a discusión por primera vez un informe elaborado conjuntamente por el responsable de la Política Exterior de la UE, Javier Solana, y el equipo de la presidencia europea de Luxemburgo, en el que se les planteaba si no ha llegado el momento de abrir el diálogo con los grupos de oposición islamista moderada para alentar la transición democrática. El informe decía «hasta ahora la UE ha preferido tratar con la intelligentsia laica de la sociedad civil árabe a expensas de las más representativas organizaciones inspiradas en el islam», y se preguntaba «¿ha llegado el momento de que la UE se implique más con la sociedad civil de base islámica en estos países?». Sin duda esta cuestión ha entrado en el debate y la reflexión pero sin que se hayan dado los pasos necesarios para llevarla a la práctica. En este sentido, la inclusión progresiva de los actores de la sociedad civil del movimiento islámico en los foros y actividades del proceso Euromediterráneo sería un primer paso deseable que, además, contribuiría al necesario diálogo entre los sectores secularizados y los islamistas.

Los factores culturales

En general el proceso euromediterráneo ha quedado demasiado al margen de las sociedades y ha tenido una muy escasa repercusión en las opiniones públicas, privilegiando ante todo las relaciones entre los gobiernos. La conocida preocupación por el «diálogo entre civilizaciones» se

⁸ Driss al-Yazami, «Ways and Conditions for the Participation of the Civil Society of Religious Inspiration in the Euro-Mediterranean Partnership», en *Bringing the Euro-Mediterranean Partnership Closer to People*. Friederich Ebert Stiftung, Fes, 2006.

ha plasmado en diversos encuentros inter-religiosos en forma de grandes conferencias coyunturales reuniendo a ulemas, rabinos y obispos, cuando no son esos los actores fundamentales en el desencuentro social y cultural existente en la cuenca mediterránea.

Es cierto que ha habido también pasos positivos en algunos ámbitos como es el caso de la creación de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos, convertida en un laboratorio de vigilancia que no deja de denunciar los frecuentes abusos y violaciones, independientemente de la escasa influencia que ejerce sobre las autoridades políticas al respecto. O la iniciativa en 2003 de llevar a cabo una reflexión crítica en el marco de un «comité de sabios» sobre el «Diálogo entre los pueblos y las culturas en el espacio mediterráneo». El informe elaborado ofreció un análisis interesante sobre la naturaleza de la comunicación y el intercambio en el contexto político mediterráneo y mundial. No obstante, el silencio en que quedó dicho informe lo convirtió en un ejercicio de buenas intenciones donde sus exigencias y propuestas no fueron tenidas en cuenta por los políticos. A continuación se creó la Fundación Anna Lindh para el Diálogo entre las Culturas, con sede en Alejandría, cuyos resultados aún no se pueden calibrar dada su reciente puesta en marcha, pero que, en cualquier caso, se enfrenta al desafío de desarrollar una labor de integración de actores plurales e independientes al estar dirigida por los representantes políticos de los respectivos gobiernos.

Pero en los tiempos actuales, la difícil situación existente, marcada por la extensión del fenómeno terrorista y por una sobredimensión de la visión binaria entre «nosotros» y «ellos», que parece alejarnos más que nunca, exige asumir importantes acciones que contribuyan a eliminar la violencia y el desencuentro social. Recuperar el verdadero espíritu de la Declaración de Barcelona puede ser una contribución en positivo. Ello significaría afrontar los verdaderos problemas y desafíos que afligen a la región y que estaban presentes en la letra de esa Declaración nunca verdaderamente aplicada.

Ningún aparato de seguridad, por muy eficiente que sea, puede prevenir cada uno de los ataques planeados por personas dispuestas a morir matando y, por ello, cualquier respuesta de seguridad tiene que ir acompañada de una real apertura del sistema político y una mayor igualdad de oportunidades socioeconómica si se quieren minimizar los riesgos de atentados y de inestabilidad. Existe una enorme nueva generación de jóvenes (el 60% de la población total árabe tiene menos de 20 años) enajenados contra los sistemas políticos clánicos y de patronazgo que les excluyen y bloquean cualquier posibilidad de promoción sociolaboral. Entre este segmento de población la reivindicación del Estado de derecho es una

de las constantes. Por ello, se da una urgente necesidad de evolucionar hacia gobiernos con apoyo social capaces de gestionar con eficacia las economías y transmitir la garantía de estar regidos por un Estado de derecho. Corrupción y represión (cuando no tortura) son dos estigmas de las formas de gobierno actuales que hay que contribuir a erradicar dando la debida importancia al compromiso euromediterráneo de trabajar por la democratización y el respeto de los derechos humanos aplicando con más determinación las cláusulas de condicionalidad. Sin embargo, aunque no pierden la ocasión de afirmar que el Estado de derecho es una de sus prioridades, los europeos no han mostrado hasta ahora ninguna predisposición a aplicar verdaderamente la condicionalidad democrática.

Asimismo, aunque la UE desea implicarse en la solución de los conflictos y las tensiones en esta parte del mundo, conciente de que la proximidad de un conjunto geopolítico como el medio-oriental en aguda crisis de estabilidad y con índices elevados de subdesarrollo supone un enorme desafío para el propio espacio europeo, la carencia evidente de una política exterior común les impide desempeñar ese ansiado papel. Entretanto, el tiempo va imponiendo una situación cada vez más perniciosa porque sociedades con un sentimiento acumulado de humillación, castigo y arbitrariedad son una mala alquimia para evitar derivas violentas y asentar la estabilidad de una región con conflictos explosivos (Palestina, Iraq). Hay que tener en cuenta, además, el contexto particular en que se ha arraigado esa frustración y que la hace más potencialmente virulenta. De un lado, las poblaciones árabes y musulmanas son mayoritariamente urbanas y su extensa nueva generación de jóvenes ha tenido un acceso masivo a la educación, de manera que se trata de sociedades en que una parte sustancial de las mismas está muy politizada. Por otro lado, tienen una memoria colectiva muy acentuada sobre su pertenencia a una parte determinante del mundo (cuna de grandes civilizaciones, situación estratégica de gran valor geopolítico y acumulación en su suelo de las principales fuentes de hidrocarburos del mundo) que les debería dar influencia y bienestar pero cuyos beneficios han quedado desde hace más de un siglo completamente fuera de su control. Todo ello son factores sociológicos y psicológicos que redundan en la radicalidad de la reacción a la que están expuestos los sectores más vulnerables de esas sociedades.

Otro componente importante a tener en cuenta es la importancia en reforzar el buen funcionamiento de las estructuras y las instituciones en lugar de seleccionar *a priori* a los actores o líderes. No se trata de tratar de construir el perfecto hombre árabe pro-occidental y laico que de manera hasta caricatural preside muchas veces los deseos de las actuaciones políticas. Esa es una injerencia que ha dado siempre desastrosos y con-

traproducentes resultados. Se trata de potenciar mecanismos de gobierno y gestión transparentes, competitivos y sometidos a leyes democráticas, independientemente de que los actores que los representen pertenezcan a universos laicos o islamistas. Son los ciudadanos de esos países quienes tienen que trazar su propio destino eligiendo a sus representantes y a los movimientos o partidos políticos en los que depositen su confianza.

Y, lo que es fundamental es romper esa dicotomía excluyente entre «ellos» y «nosotros» porque no representa más que la visión estrecha de los extremos, ocultando toda una centralidad mayoritaria en la que estamos todos mezclados e interconectados. No se trata de acercar civilizaciones sino de asentar el principio de que existen unos valores civilizacionales comunes que todos hemos contribuido históricamente a forjar y que conjuntamente debemos compartir. La barbarie y la civilización están en los dos lados. Es por ello que es necesario avanzar hacia una reconciliación ética y moral entre el mundo occidental y musulmán, dejando de lado sentimientos de superioridad cultural al servicio de la dominación política. Muchas veces en la historia se ha utilizado la cultura para invertir en políticas hegemónicas. Cuando más se difunden discursos sobre la incompatibilidad cultural y religiosa, y sobre la supuesta existencia de civilizaciones monolíticas y aisladas es cuando la política está siendo más descarnada y opresora. Justamente para ocultar a la segunda con las primeras. Ocurrió durante el colonialismo europeo y ha vuelto a ocurrir con el neo-colonialismo estadounidense en Oriente Medio.

En realidad, las raíces del desencuentro están en el abismo que existe entre las percepciones mutuas. Las sociedades occidentales han sido obsesionadas con el «problema» cultural y religioso, buscando en el Islam la explicación y razón de ser de todo lo que ocurre en el llamado mundo musulmán, como si funcionase de manera excepcional con respecto al resto del mundo, simplemente por eso, porque son musulmanes. Este es el «velo» particularmente occidental que caracteriza hoy día a nuestras sociedades y que les impide entender las profundas razones políticas, sociales y económicas de lo que ocurre en los países vecinos del sur. Sin embargo, lo que determina la visión de la mayoría social árabe y musulmana con respecto a Europa y el mundo occidental son sus actuaciones políticas, muchas veces arbitrarias y cínicas, dominadas por su apoyo a los gobiernos totalitarios, su inacción ante los derechos palestinos, su fracaso para detener la ocupación de Iraq. Es decir, su doble rasero a la hora de aplicar la ley internacional, la Convención de Ginebra y el respeto de los derechos humanos.

En conclusión, si realmente se quiere instaurar en el Mediterráneo un espacio de diálogo y estabilidad no hay como dejar de traicionar la Declaración de Barcelona y aplicarla respetando el espíritu que la promovió.